



Informe político aprobado

COORDINADORA ANDALUZA 21 DE DICIEMBRE DE 2025

Crisis de Estado: la estrategia desestabilizadora de las derechas reaccionarias

Las palabras de José María Aznar, “quien pueda hacer, que haga”, están determinando una legislatura de acoso y derribo al gobierno de coalición y, con ello, de boicot a los avances sociales que necesita el país. A esta estrategia se sumó desde el principio Moreno Bonilla, secuestrando la JUNTA de Andalucía al servicio de los intereses partidistas marcados desde la calle Génova. Es por esto por lo que ha sostenido una dialéctica de confrontación permanente con el gobierno de coalición incluso a costa de perjudicar a Andalucía. Su negativa a la quita de deuda o el incumplimiento de la ley de vivienda son ejemplos de ello.

Este papel de Moreno Bonilla es funcional a la crisis de Estado alimentada por la derecha política, judicial y mediática, que ha decidido convertir la confrontación institucional en su principal herramienta de oposición. El fallo contra el fiscal general del Estado, utilizado como ariete, es el ejemplo más reciente de una estrategia que pretende cuestionar la legitimidad del Gobierno de coalición y erosionar la arquitectura institucional. En estas semanas en las que recordamos el asesinato de Caparrós aquel 4 de diciembre de 1977, somos muy conscientes de la herencia del franquismo tan presente en esta legislatura en forma de injerencias políticas desde el Estado profundo.

La concepción patrimonial del poder político de las derechas reaccionarias les hace renunciar a la lógica democrática del reconocimiento de la voluntad popular y por eso su estrategia de desestabilización pretende instalar la idea de un Estado fallido para forzar un cambio de ciclo político por la vía del desgaste.

Esta ofensiva no tiene un proyecto de país para las mayorías sociales: su objetivo es derogar el mandato popular que sostiene al Gobierno y frenar cualquier avance social o democratizador que posibilita la entrada de la izquierda alternativa en el gobierno de coalición. La guerra judicial, con el caso del fiscal general como claro exponente, y el bloqueo de la patronal a la negociación de los convenios, forman parte de esta ofensiva cuya pretensión es paralizar los avances sociales. La subida del SMI y otras medidas que mejoran la vida de la clase trabajadora no terminan de tener todo el impacto por la actitud bloqueadora de la patronal en la resolución del convenios en Andalucía.

Por tanto, toda la conjura cantada por Aznar no responde a que el Partido Popular no esté en el gobierno o a que Pedro Sánchez sea presidente: responde a que en el gobierno de coalición hay fuerzas de izquierdas coaligadas en el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar que mantienen vivo el proceso democratizador que necesita el país, que hacen de dique de contención ante el asedio al estado del bienestar y la democracia, y que marcan una política internacional distanciada del rearme auspiciado por los EE.UU.



Crisis del bloque de investidura

La mayoría parlamentaria que ha sostenido la legislatura atraviesa un momento delicado. El nuevo papel de JUNTS, convertido en actor bisagra y en fuerza que administra su apoyo a partir de un cálculo estrictamente táctico, introduce elementos de inestabilidad. Ello, sumado a la oposición fluctuante de Podemos, que en no pocas ocasiones vota conjuntamente con el Partido Popular y con Vox para tumbar medidas del gobierno de coalición, y que mantiene un discurso agresivo hacia el gobierno de coalición y derrotista ante el envite de las derechas reaccionarias, complica más aún el devenir de la legislatura.

El riesgo no reside solo en la pérdida de apoyos puntuales, sino en la posibilidad de que la fragmentación que permitió la investidura frustre la agenda de avances sociales. La pluralidad de la mayoría es una fortaleza, pero también exige una altura de miras que no siempre está presente en todos los actores. Esta legislatura no debe ir de salvar el futuro de tal o cual partido o de tal o cual dirigente o candidata de su partido: va de blindar el estado del bienestar, y las libertades y garantías democráticas.

La crisis del bloque de investidura acontece por los movimientos de Junts y Podemos pero también por el impacto de los casos de abusos sexuales en el electorado. Hay que recordar que el voto femenino fue crucial para que los resultados del 23J evitasen un gobierno de Partido Popular y Vox. Por tanto, la coherencia con el discurso feminista por parte de las fuerzas coaligadas en el gobierno ha de ser total para que esta grieta no se agrande más.

En consecuencia exigimos al PSOE que esté a la altura de la crisis generada en sus propias filas por los casos de corrupción y denuncias de acoso sexual. Cuando surgen dificultades políticas o situaciones que generan desconcierto, la respuesta no puede ser el silencio ni la inercia, por eso IU ha trasladado la necesidad de convocar la Comisión de Seguimiento del acuerdo de Gobierno.

Esa Comisión no es un gesto simbólico, es un instrumento político previsto precisamente para evaluar, corregir y relanzar la acción del Ejecutivo cuando se detectan problemas.

La reacción a esta crisis debe ser rápida, clara y políticamente contundente, especialmente en todo lo relacionado con la transparencia y la asunción de responsabilidades porque la clase trabajadora necesita certezas, dirección política y señales claras de que el Gobierno sigue teniendo iniciativa y capacidad de liderazgo. La Comisión de Seguimiento debe servir para poner encima de la mesa las prioridades reales y para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, especialmente en el ámbito de la agenda social. No basta con resistir, hace falta avanzar. Es muy grave que la corrupción surgida en las filas del PSOE pueda poner en riesgo un gobierno de coalición que hoy protege el estado del bienestar y las garantías democráticas frente a la mayor ofensiva reaccionaria de las últimas décadas. Lamentablemente el PSOE sigue trufado de prácticas deleznales propias del viejo bipartidismo que no han sido superadas. IU es implacable ante la corrupción y consciente de la tarea histórica que ha de jugar el gobierno de coalición, por tanto, se plantea todos los escenarios posibles si

el PSOE no resuelve debidamente ambas cuestiones: su crisis por casos de corrupción en sus filas y la agenda democratizadora y social que demandan las capas populares.

Inicio de ciclo electoral: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía

Se abre un ciclo electoral clave para el futuro del país con votaciones en Castilla y León, Extremadura y Andalucía. En los tres territorios el Partido Popular llega con un escenario inestable: puede perder gobiernos o quedar definitivamente atado a Vox. No nos jugamos solo gobiernos autonómicos, se está configurando una nueva derecha, desprendida de compromisos democráticos, y un modelo social en el que los derechos sociales y los servicios públicos que los materializan pueden ser algo del pasado.

En Castilla y León y Extremadura, el PP afronta el desgaste acumulado por años de políticas regresivas y por la dependencia creciente de Vox para sostener sus ejecutivos. En Andalucía, vemos cómo la propaganda del gobierno andaluz y la confrontación con el gobierno central son incapaces de tapar la enorme desafección popular con respecto al gobierno de Moreno Bonilla por la crisis sanitaria, el deterioro de los servicios públicos, la privatización acelerada de la universidad, la carestía de la vivienda y los problemas estructurales del mundo rural, cada vez más abandonado.

Por eso, este en este ciclo electoral se van a medir dos cuestiones: si el Partido Popular va a acrecentar su fusión ideológica y programática, así como dependencia electoral, con la ultraderecha; y si la izquierda que representamos es capaz de movilizar a una mayoría social que rechaza la vía reaccionaria y que sufre las políticas antisociales y negacionistas de los gobiernos del Partido Popular.

Las elecciones andaluzas: el país también se la juega en Andalucía

Las elecciones andaluzas son decisivas para el país. Lo que ocurra en Andalucía puede poner freno al avance de las derechas reaccionarias o, por el contrario, consolidar un bloque reaccionario que ya ha demostrado su plan de entregar el territorio a los intereses de los especuladores y de dinamitar los derechos sociales.

Por tanto, frente al referéndum sobre Pedro Sánchez en que pretende convertir las elecciones el Partido Popular, lo que se decide en las urnas andaluzas es el modelo de sociedad que queremos para nuestra tierra y, en coherencia, el proyecto de gobierno que lo ha de llevar a efecto. Nos jugamos el autogobierno que se conquistó para proteger al pueblo andaluz.

El Partido Popular no tiene un proyecto para la mayoría social andaluza, pero Moreno Bonilla sí ha desplegado un plan para imponer un modelo antisocial basado en la privatización progresiva de la sanidad y universidad públicas, el deterioro de los servicios públicos, la alianza con el partido inmobiliario frente al derecho a la vivienda, la desprotección ambiental en beneficio del negocio urbanístico y la economía extractiva, y las prácticas corruptas.



En este sentido, la crisis de los cribados ha sido el catalizador de una indignación popular latente y la cruda expresión del modelo del Partido Popular. La privatización encubierta de la sanidad pública realizada a golpe de conciertos sanitarios y paralela al desmantelamiento de la asistencia pública ha mermado la salud pública y generado inquietud en todas las familias andaluzas. Lejos de afrontar con transparencia y asumiendo responsabilidades, la respuesta del gobierno andaluz ha dejado más en evidencia la falsa “moderación” de Moreno Bonilla. La gente ha visto la crudeza del desmantelamiento de la sanidad pública, ha sentido incertidumbre sobre la capacidad del sistema sanitario de proteger su salud y, encima, ha pillado en sus mentiras al gobierno andaluz. La quiebra de confianza de gran parte de la ciudadanía en Moreno Bonilla por la crisis de los cribados es irreversible por la gravedad de lo ocurrido y porque esta expresa un modelo de gestión neoliberal, impugnado en las calles, que no va a modificar el Partido Popular.

A la crisis de los cribados se ha superpuesto el escándalo de corrupción del Partido Popular en Almería con extensiones hasta San Telmo. El Partido Popular está trufado de corrupción. En Almería han hecho lo mismo que han hecho en la Comunidad de Madrid: lucrarse con las mascarillas. No es un hecho aislado, es una forma de gobernar. Este es el modelo del Partido Popular: poner a Andalucía al servicio del enriquecimiento de unos pocos. Igual que entregan millonadas a clínicas privadas, tampoco dudan en aliarse con narcotraficantes para hacer negocios. Asusta la relación tan fluida que el PP mantiene con el mundo del narcotráfico que hemos visto en Marbella y ahora en Almería. Moreno Bonilla lo sabía y lo tapó. Lo sabía porque le llevamos pidiendo explicaciones sobre esto desde 2021 y ha estado cuatro años tratando de esconder lo que estaba pasando. Ante este latrocinio del Partido Popular nuestra organización en Almería ha emprendido acciones judiciales para, junto a la fiscalización política que realizamos en el Parlamento Andaluz, llegar hasta el fondo del asunto y exigir todas las responsabilidades políticas y penales que puedan darse.

Si con la crisis de los cribados se le cayó la careta de moderado a Moreno Bonilla, con este escándalo de corrupción, sumado a los que ya arrastraba su gobierno, ha quedado claro que el PP andaluz es como en todas partes: corrupto. No hay PP bueno.

Por eso, lejos de rendir cuentas por su gestión, Moreno Bonilla intenta desviar la atención de cuanto pasa en Andalucía al marco de confrontación en el que están instaladas las derechas reaccionarias a nivel estatal.

Nuestro papel está siendo el de defender el territorio y la clase trabajadora andaluza mediante la fiscalización y la propuesta alternativa. Es por esto que nos oponemos frontalmente a la propuesta de presupuestos que presenta el gobierno andaluz: sigue la senda de deterioro de servicios públicos, de abandono del mundo rural, de falta de atención a los barrios vulnerables, de privilegios fiscales para una minoría enriquecida y de inacción ante los graves problemas de las familias trabajadoras: la vivienda, la dependencia, el coste de la vida y la privatización de la sanidad, la formación profesional y la enseñanza universitaria.

Es por esto que Por Andalucía ha presentado 647 enmiendas a los presupuestos de la Junta que movilizarían 13.074 millones de euros, como alternativa al modelo neoliberal fracasado de Moreno Bonilla.

La propuesta se articula en seis líneas estratégicas:

1. 6.000 millones para reforzar servicios públicos esenciales (sanidad, educación, derechos sociales).
2. 830 millones para vivienda pública.
3. 2.791 millones para un nuevo modelo económico y empleo de calidad.
4. 1.200 millones contra la pobreza y exclusión.
5. 1.136 millones para movilidad sostenible.
6. 1.400 millones contra la despoblación rural.

Con ellas buscamos intervenir desde lo público para resolver problemas reales de la gente, no para beneficiar a unos pocos.

Para financiar estas propuestas, planteamos nuevos ingresos por 7.184 millones de euros mediante una reforma fiscal progresiva que revertiría las rebajas fiscales del PP (recuperando 2.193 millones), la incorporación de recursos de la quita de la deuda (2.032 millones), y refuerzo de la inspección fiscal para combatir el fraude. Con nuestra alternativa presupuestaria hacemos que lo público sea garantía de derechos y no nicho de negocio para unos pocos, en contra de lo planteado en los presupuestos presentados por el gobierno andaluz.

Con toda certeza podemos decir que el crecimiento electoral de Por Andalucía será significativo de cambio de tendencia a nivel estatal que permita disputar el país a la mayoría social trabajadora que demanda un Estado protector, con servicios públicos fuertes y con libertades y garantías democráticas. Es decir, en Andalucía también confronta el proceso destituyente que empujan las derechas reaccionarias con el proceso democratizador que abanderamos desde la izquierda.

La estrategia de Por Andalucía: recuperar el terreno de lo común

Frente a la operación de distracción de Moreno Bonilla, Por Andalucía tienen que desplegar una estrategia que centre la precampaña y campaña en la sanidad pública, denunciando las privatizaciones encubiertas y crisis asistencial; en la defensa de los servicios públicos como garantes de igualdad y bienestar de las capas populares; en la vivienda como derecho prioritario que ha de garantizarse por los poderes públicos frente a la especulación y la turistificación; en atender los problemas del mundo rural cuya máxima expresión es la despoblación; y en la limpieza y ética en la gestión pública frente a las prácticas corruptas del Partido Popular.



La apuesta es clara: poner a Andalucía en el centro, llevar el debate a los problemas cotidianos de la gente y dar esperanzas en torno a un proyecto que garantice derechos, genere empleo de calidad, redistribuya la riqueza y proteja los recursos naturales.

En este sentido el papel de la redes de activistas es y será fundamental en todo cuanto tiene que ver en la elaboración programática, la incorporación de voluntarios y voluntarias en el proceso y la capacidad de vertebrar el mismo en las distintas provincias. El potencial de nuestra militancia a pie de conflicto se ha vuelto a poner de manifiesto en clave feminista con la rápida intervención y acompañamiento a Juana Rivas en el último episodio vivido con la sentencia que enviaba al hijo menor a Italia con su padre y en el grito colectivo organizado en torno a la crisis de los cribados de cáncer de mama. Es clave seguir fomentando y articulando herramientas organizativas a las redes de activistas. Si en precampaña y campaña conseguimos desplazar el foco del plebiscito artificial a la realidad concreta en la que viven los andaluces y andaluzas, en estas elecciones Andalucía podrá convertirse en la punta de lanza de un nuevo impulso para transformar Andalucía y el país que fortalezca la democracia y frene a las derechas reaccionarias que alimentan el odio y la división.

Por Andalucía da pasos firmes y aporta certezas de cambio a la mayoría social

El papel de IUCA ha sido crucial para la continuidad de Por Andalucía como espacio de confluencia y unidad de las izquierdas en Andalucía. Tras un proceso de un año en el que se ha deliberado y compartido propuestas de cara a las próximas elecciones andaluzas, se ha consolidado un proyecto de matriz andalucista, ecologista, feminista y transformador capaz de aglutinar a las fuerzas políticas de IUCA, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz junto a personas independientes provenientes de los movimientos sociales.

De esta forma, las fuerzas políticas que apuestan por la unidad se han puesto de acuerdo en una propuesta política para Andalucía y han realizado procesos internos de elección de candidatos y candidatas para la conformación de las listas de Por Andalucía.

En una primera fase cada fuerza política ha realizado su proceso interno, primarias en el caso de IUCA, para proponer candidatos y candidatas a la presidencia de la JUNTA. En este sentido, las primarias de IUCA arrojaron un candidato para la presidencia, Ernesto Alba, así como las cabeceras, paritarias, para cada provincia. Fue un proceso participativo en el que IUCA demostró su capacidad de articular procesos participativos y de ofrecer cuadros políticos al servicio de la batalla electoral. Y también este proceso ha dado a conocer a muchas andaluzas y andaluces el perfil político de Ernesto Alba, quien está llamado a revolver conciencias e incorporar al proceso político a capas populares desencantadas que no encuentran en la política tradicional su referencia de izquierda.

En una segunda fase, las fuerzas políticas de Por Andalucía consensuaron, por unanimidad, que la persona que mejor representaba al conjunto del espacio político para

disputar la presidencia de la JUNTA era Antonio Maíllo. Esta decisión de la mesa de partidos ha supuesto un auténtico revulsivo en las bases electorales de nuestro espacio político y ha generado muchas expectativas en Por Andalucía. No cabe la menor duda de que IUCA ha puesto lo mejor de sí para garantizar un cambio político en Andalucía, porque nuestra tierra va por delante y porque aquí se empieza a decidir el futuro del país. Si Por Andalucía hace bien las cosas propiciando un proceso de acumulación de fuerzas por abajo, interpelando al tejido social, y hace arraigar la esperanza en los pueblos y barrios de Andalucía, sin duda va a aguar la fiesta a los especuladores que han venido beneficiándose del gobierno de Moreno Bonilla. Con Antonio Maíllo de candidato a la presidencia de la JUNTA todo es posible. Tenemos el mejor candidato y tenemos unidad de fuerzas políticas: IUCA está cumpliendo con la gente que quiere poner un gobierno al servicio de la mayoría social y sin especuladores.

En la tercera fase, que se inicia ahora, Por Andalucía tiene que abordar la conformación de las listas electorales, más allá del candidato a la presidencia, dando encaje al conjunto de fuerzas políticas que han apostado por la unidad y a personas independientes que se deben vincular, también, a las candidaturas. También hemos iniciado el proceso participativo de elaboración programática con un encuentro en torno a la escuela pública la próxima semana y que tendrá continuidad con otro en torno a la sanidad pública en la primera quincena de enero.

No hay duda de que este proceso de elaboración programática ya nos sitúa en precampaña, en la cual hay que intensificar la agenda de actos públicos y poner a IUCA y a Por Andalucía a punto para el proceso electoral con la creación de las comisiones electorales correspondientes.

Además, es muy importante que en esta precampaña se incorporen voluntarios y voluntarias al proceso político. Por Andalucía tiene que brindar herramientas de acción política y fórmulas flexibles de participación para que mucha gente que tiene ganas de contribuir al cambio político pueda hacerlo con Por Andalucía.

Del mismo modo, es también momento de capacitar a nuestra militancia para la agitación virtual militante, en la línea de lo aprendido en las jornadas celebradas en Mollina, para que la precampaña y campaña pueda disputarse con garantías no solo en la calle sino, también, en las redes sociales.

Una estrategia electoral que rompa el marco de las derechas reaccionarias

La estrategia electoral de IUCA busca articular un proyecto de movilización política, social y electoral diseñado para reconfigurar y hegemonizar el espacio de la izquierda transformadora en Andalucía y frenar el avance del bloque reaccionario. Para ello, empleará una narrativa unitaria que combine identidad andaluza, defensa de lo público y justicia social, con el fin de construir una polarización política efectiva entre las familias trabajadoras y los especuladores a los que sirven las derechas.



La campaña se estructurará en fases progresivas que irán desde la consolidación de la identidad del proyecto de Por Andalucía hasta un sprint final de alta carga emotiva y movilizadora. Mantendrá un tono optimista, empático y cercano, que pondrá el foco en las experiencias personales de los andaluces y andaluzas, a través de las cuales vehiculará nuestras soluciones. Con ello se busca, en primer lugar, consolidar los nichos de voto tradicionales de nuestro espacio y, posteriormente, activar electoralmente a sectores clave: votantes desencantados del PSOE, jóvenes abstencionistas, mujeres y una clase obrera cada vez más radicalizada hacia la izquierda —como ‘efecto péndulo’ ante el avance del bloque reaccionario— pero que todavía tiene en Pedro Sánchez a su principal referente.

El mensaje central, “Andalucía es rica, pero los especuladores roban nuestra riqueza”, se materializará en propuestas concretas sobre los ejes centrales de la campaña (vivienda, sanidad, etc.). Una comunicación coral y cercana combinará presencia territorial, acción en redes sociales y una agenda mediática proactiva para instalar la dicotomía entre el cuidado de lo común y el sálvese quien pueda.

Esta estrategia no busca solo competir por votos, sino generar una identificación de clase y emocional que permita a Por Andalucía erigirse como la referencia política útil y necesaria para defender los intereses de la mayoría social andaluza frente a la ofensiva de las derechas. Ofrece certezas de cambio, solvencia y seguridad frente a un gobierno andaluz más preocupado en salvarse de sus escándalos que en resolver los verdaderos problemas que afectan a los andaluces y andaluzas.

El campo como moneda de cambio de la Comisión Europea

Esta semana se han manifestado en Bruselas agricultores de toda Europa por los recortes en la PAC. Los recortes en la PAC son consecuencia de la orientación belicista del nuevo marco financiero plurianual que supone un recorte de un 22% de los fondos agrarios para multiplicar por 5 el gasto militar.

Entre las prioridades de la Comisión Europea no está la soberanía alimentaria, están los intereses de la industria centroeuropea y de las grandes multinacionales de la distribución agroalimentaria. A esto responde el acuerdo MERCOSUR

Este martes se ha aprobado en Bruselas la cláusula de salvaguardia. Una cláusula de salvaguardia para los productos agrícolas en el acuerdo con Mercosur que, lamentablemente, es débil, tardía y prácticamente inaplicable. No lo decimos solo nosotros: las propias organizaciones agrarias europeas la califican de maquillaje político que no va a proteger a nuestros productores. ¿Por qué no funciona?

Primero, porque exige demostrar un “perjuicio grave”, un estándar jurídico tan alto y tan vago que hace casi imposible activar una investigación. Los supuestos umbrales que se presentan no son vinculantes y solo sirven como excusa para no actuar.

Segundo, porque obliga a probar que el daño al sector agrario se debe exclusivamente al acuerdo con Mercosur, algo casi imposible en mercados afectados por múltiples factores como los costes, la especulación o la demanda.

Tercero, porque las medidas son temporales y limitadas: solo pueden aplicarse durante doce años y, como máximo, durante cuatro años por producto. No sirven para afrontar problemas estructurales.

Y, además, pueden quedar bloqueadas por los Estados miembros, politizando un mecanismo que debería ser rápido y eficaz.

En definitiva, no estamos ante una herramienta preventiva, sino ante un parche tardío que no aborda la raíz del problema: la competencia desleal, las diferencias en normas ambientales y laborales, y la crisis de rentabilidad de la agricultura social y profesional.

Este paripé de las cláusulas de salvaguardia ha respondido al intento de la Comisión Europea de convencer a los países más reacios al MERCOSUR. Esto significa que ya estamos a las puertas de que el consejo europeo apruebe la aplicación del tratado.

Nosotros somos claros: el acuerdo con Mercosur es un mal acuerdo que va directamente contra: la soberanía alimentaria, contra la agricultura y la ganadería social y profesional, y contra la cohesión territorial de nuestro país.

En España el impacto será especialmente duro. Sectores ya muy tensionados, como el vacuno, el avícola, el azúcar o el maíz, sufrirán una competencia desleal con productos más baratos y sin las mismas exigencias sanitarias, ambientales o de bienestar animal.

El MERCOSUR golpea directamente al empleo rural, a la ganadería extensiva y al equilibrio territorial. Y el golpe es doble. Mientras se abre el mercado a esta competencia desleal, la derecha europea impulsa un Marco Financiero Plurianual que recorta la PAC para destinar más recursos al rearme. Menos apoyo al campo y más dinero para armas.

Hay que decirlo con claridad: no se defiende al campo firmando Mercosur ni recortando la PAC, el PP y el PSOE, principales valedores del MERCOSUR, anteponen los intereses del agrobusiness a los de los productores ligados al territorio.

Defender la soberanía alimentaria es rechazar este acuerdo y apostar por una PAC bien financiada que apoye estratégicamente a la agricultura y ganadería social y profesional europeas.